TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 2/2016, relativo a la creación de nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará José Silva Sánchez, Municipio de Abasolo, Tamps.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. ODILISA GUTIÉRREZ MENDOZA

SECRETARIO: LIC. GILBERTO VIDRIO AVILA

VISTO para resolver el juicio agrario número 2/2016, que corresponde al expediente número 4795, relativo a la creación de nuevo centro de población ejidal, promovido por un grupo de campesinos que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas; y

RESULTANDO:

I. SOLICITUD. Por escrito sin fecha un grupo de campesinos solicitó la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominaría "José Silva Sánchez", municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, señalando como predios presuntamente afectables los ubicados dentro del Distrito de Drenaje "San Fernando". (Fojas de la 52 a la 54 del legajo 1)

II. INSTAURACIÓN. Por proveído de diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, la Subdirección de Nuevos Centros de Población Ejidal de la Dirección General de Procedimientos Agrarios instauró el procedimiento bajo el número 4795. (Foja 19 del legajo 1)

III. PUBLICACIÓN. La solicitud para la creación del citado nuevo centro de población ejidal se publicó el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tamaulipas, el cinco de enero de mil novecientos ochenta y tres, respectivamente. (Fojas 71 a la 74 del legajo 1)

IV. CAPACIDAD AGRARIA. Para verificar la capacidad agraria se comisionó al ingeniero J. Guadalupe Saucedo García quien una vez que llevó a cabo la diligencia censal levantó el acta correspondiente el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y dos, haciendo constar que la diligencia censal arrojó treinta y cuatro campesinos capacitados. (Fojas 59 a la 63 del legajo 1)

V. COMITÉ PARTICULAR EJECUTIVO. Por asamblea celebrada el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos, se designó a Simón Polanco González, Francisco Martínez Hernández y Refugio Cervantes Gómez, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente, del comité particular ejecutivo, habiéndose expedidos los nombramientos por la Subdirección de Nuevos Centros de Población Ejidal de la Dirección General de Procedimientos Agrarios, el diez de noviembre del mismo año. (Fojas 31 a la 33 del legajo 1)

VI. IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. La Dirección General de Procedimientos Agrarios el cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, emitió opinión, manifestando que el grupo promovente no dio cumplimiento a lo señalado por el artículo 244 de la Ley Federal de Reforma Agraria, tal como lo señala la Comisión Agraria Mixta en el estado de Tamaulipas, en el oficio número 241 de diecisiete de enero del mismo año, y que no obstante lo anterior se continuó con el trámite del mismo, sin haberse realizado durante el procedimiento trabajos técnicos informativos, en virtud de lo manifestado por el Delegado Agrario en el estado, por oficio 612 de uno de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en el sentido de que los solicitantes señalaron como predios afectables los terrenos expropiados para la instalación de sistema de drenaje San Fernando, por tal motivo la Delegación Agraria consideró diferir dichos trabajos hasta que la Secretaría de la Reforma Agraria tuviera disponibilidad de la superficie expropiada.

Que el departamento técnico de dicha dirección llevó a cabo el análisis técnico al expediente que nos ocupa, y obteniéndose que de las carpetas topográficas de catastro rural y regularización de la tenencia de la tierra del estado de Tamaulipas, no se localizaron predios afectables que pudieran satisfacer las necesidades agrarias del grupo gestor.

Por otra parte el grupo peticionario por escrito sin fecha aceptó trasladarse al lugar en donde la Secretaría de la Reforma Agraria localizara la superficie necesaria para establecer al grupo promovente, razón por la cual dicha dirección de nuevo centro de población ejidal consideró que el expediente quedaba reservado hasta en tanto se contara con la superficie disponible para ubicar a los solicitantes en los términos del artículo 341 párrafo segundo de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Que en razón de lo anterior por oficio número 465425 de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se requirió al Delegado Agrario en la entidad para que determinara la existencia de predios afectables para resolver la acción agraria que nos ocupa, dependencia que por oficio número 1695 de dos de abril del mismo año, señaló que eran nulas las posibilidades de contar con superficie para satisfacer las necesidades agrarias de los solicitantes de conformidad con lo previsto por el artículo 247 de la Ley Federal de Reforma Agraria, emitiendo la siguiente opinión:

“Primero. Es de considerarse improcedente la solicitud formulada por los promoventes del nuevo centro de población ejidal de referencia, toda vez que no agotaron los procedimientos agrarios de restitución, dotación o ampliación de ejidos.

Segundo. Es improcedente la creación del nuevo centro de población ejidal, en virtud de lo señalado por el C. Delegado Agrario de considerar nulas las posibilidades de contar con superficies para satisfacer necesidades agrarias, además de no existir tierras disponibles en la entidad para la creación de nuevos centros de población ejidal.

Tercero. Archívese el expediente como asunto concluido.

Cuarto. Notifíquese el resultado de este acuerdo al C. Gobernador Constitucional de la entidad, así como al comité particular ejecutivo del expediente en cuestión, sin perjuicio de que ejerciten el derecho de acomodo en los términos del artículo 23 de la Ley Agraria en vigor”. (Fojas 2 y 3 del legajo 1)

VII. AMPARO NÚMERO 361/2001. Inconforme con el acuerdo anterior los integrantes del comité particular ejecutivo del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará “José Silva Sánchez”, municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal señalando como autoridades responsables: a la Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezagó Agrario; al Director de Nuevos Centros de Población Ejidal de la Secretaría de la Reforma Agraria; al Jefe del Departamento de Revisión Jurídica y Dictámenes de Reforma Agraria; al Jefe de Archivo Central de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como al Cuerpo Consultivo Agrario, mismos que en la actualidad han sido sustituidos por el Tribunal Superior Agrario.

El veintiséis de agosto de dos mil dos, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dictó sentencia decretando el sobreseimiento por una parte, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que continuaran con el procedimiento agrario, para que una vez que se pusiera en estado de resolución, se turnara al Tribunal Agrario correspondiente para la resolución definitiva, con estricto apego a lo señalado en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas al artículo 27 constitucional de tres de enero de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero del mismo año.

Inconforme con la sentencia anterior las autoridades responsables interpusieron el recurso de revisión el siete de abril de dos mil tres, ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y fue radicado el veinticinco del mismo mes y año, con el toca número R.A. 189/2003-2426, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y dictó ejecutoria el once de julio del citado año, en los siguientes términos:

“PRIMERO.- En la materia de la revisión se confirma en sus términos la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos y las autoridades señaladas en el considerando tercero de la sentencia impugnada.

TERCERO.- La Justicia de la unión ampara y protege a Simón Polanco González, Francisco Martínez Hernández y Refugio Cervantes Gómez, presidente, secretario y vocal, respectivamente, del Comité Particular Ejecutivo agrario del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará “José Silva Sánchez”, municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, respecto de los actos y autoridades precisadas en el último considerando del fallo recurrido y para los efectos señalados en el mismo”. (Foja 1 a la 43 del legajo 3)

Los efectos de la ejecutoria se contienen en el séptimo considerando del contenido literal siguiente:

“SÉPTIMO.- Los agravios expresados por la autoridad revisionista son infundados, atentas las siguientes consideraciones jurídicas

En su primer agravio la revisionista, en lo medular señaló que por tratarse los promoventes del juicio de amparo de simples aspirantes a ejidatarios que no tienen aún derechos agrarios legalmente reconocidos y por ende no se encuentran sujetos al régimen ejidal y para efectos del juicio de amparo debe estarse a lo preceptuado por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por lo que estima que opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la propia ley invocada. Sustentando su aseveración en la tesis con rubro: “AGRARIO. AMPARO AGRARIO. TÉRMINO PARA INTERPONERLO”.

Al respecto, este Tribunal Colegiado considera que no le asiste la razón a la revisionista en atención a que los quejosos son los integrantes del comité particular ejecutivo agrario del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará “José Silva Sánchez”,

municipio de Abasolo, Tamaulipas, esto es, dichas personas promueven el juicio de amparo en representación del núcleo de población solicitante, por tanto, a éstos, por extensión debe considerárseles como un grupo de una población campesina que pretende sea beneficiado con la asignación de determinada extensión de tierras que satisfagan sus necesidades y que ello genere la constitución de un nuevo centro de población ejidal es decir, un nuevo ejido.

Por tanto, en nada difiere la naturaleza conceptual que de campesino, deba otorgársele a aquellos y a éstos, puesto que ambos, generalmente, se dedican a la explotación del campo, de donde hacen su modo de vida; sin que sea óbice para arribar a esta convicción el hecho de que los integrantes de un ejido constituido tengan derechos agrarios reconocidos, y que los miembros de una población que solicita la creación de un nuevo centro de población ejidal, no los tengan, puesto que, en todo caso, ese aspecto sería la consecuencia de la constitución del nuevo centro de población, dado que serían considerados como ejidatarios, pero no dejarían de ser campesinos.

De donde, este Tribunal Colegiado considera que, contrario a lo aducido por la revisionista, los promoventes dada su calidad de campesinos pueden promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, como lo dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime que, aún cuando sea una expectativa la creación del nuevo centro de población ejidal, de alguna manera se afecta tal posibilidad jurídica y los bienes ejidales de los que pudiera resultar beneficiado.

Sirve de apoyo a este razonamiento, en lo conducente, la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 28, Tercera Parte, Página: 53 que a la letra dice:

AGRARIO. TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO PARA NUEVOS CENTROS DE POBLACION EJIDAL. DISPONEN DEL PREVISTO PARA LOS EJIDOS DEFINITIVOS.

En atención a que el régimen legal del amparo agrario establecido en las reformas a la Ley de Amparo de 1963, es de interpretarse en el sentido de que los nuevos centros de población ejidal deben ser beneficiados con el propio régimen, puesto que el espíritu que las informó también comprende a este tipo de núcleos, resulta aplicable a ellos el último párrafo de la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo en cita, en cuanto determina que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo”.

Asimismo, es de invocarse, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, Tesis 2a/J. 87/99, Página: 204, que a la letra dice:

“NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS ASPIRANTES A AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO, CUANDO LA MATERIA DE LA RECLAMACIÓN CONSTITUCIONAL VERSE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESE CARÁCTER.

Los avecindados, como sujetos reconocidos y protegidos dentro del núcleo de población por la nueva Ley Agraria, son miembros de la clase campesina a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo, que se encuentran dentro del ámbito protector de las disposiciones del amparo agrario, entre otras, la tocante al beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja a que también se refiere el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, ámbito en el que deben considerarse incluidos también los aspirantes a avecindados cuando la materia de la reclamación constitucional verse, precisamente, sobre el reconocimiento del carácter de avecindados, lo que se desprende de la interpretación extensiva de lo establecido en la fracción III de ese artículo 212, que se refiere a los aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues los aspirantes a avecindados son, en realidad, aspirantes a ejidatarios y comuneros”.

Así como la también pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, Tesis: 2a./J. 83/99, Página: 205, que a la letra dice:

“NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO.

El libro segundo de la Ley de Amparo contiene disposiciones tuteladoras de los derechos de los sujetos del régimen agrario; así, el artículo 227 establece que en los juicios de garantías en materia agraria debe suplirse la queja deficiente, inclusive en exposiciones, comparecencias y alegatos, cuando sean parte como quejosos o como terceros perjudicados, las entidades o individuos que menciona el artículo 212 que, en su párrafo primero, incluye no sólo a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros, sino también, en forma general a "quienes pertenezcan a la clase campesina", precisando en su fracción III, a los aspirantes a ejidatarios y comuneros. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que dentro del concepto de clase campesina no se encuentran comprendidos todos los campesinos en el sentido genérico del vocablo, sino sólo los inmersos y reconocidos dentro del núcleo ejidal o comunal, criterio que sirve para actualizar y armonizar el ámbito protector del amparo agrario con el sistema instituido por la Ley Agraria en vigor, que sujeta la calidad de avecindados al reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario competente, con lo cual se les otorga un lugar dentro del núcleo de población y una situación jurídica particular con derechos y obligaciones propios, convirtiéndolos así en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina, al lado de los ejidatarios y comuneros. Consecuentemente, los avecindados, como sujetos reconocidos y protegidos dentro del núcleo de población por la nueva Ley Agraria, son miembros de la clase campesina a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo, que se encuentran dentro del ámbito protector de las disposiciones del amparo agrario, entre otras, la tocante al beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja a que también se refiere el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo".

Por otro lado, en su segundo agravio, la revisionista sustenta su aseveración en el sentido de que a su parecer en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el hecho de que, conforme a la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, previamente a la promoción del juicio de garantías, los quejosos debieron demandar la nulidad ante un Tribunal Unitario Agrario, para cumplir con el principio de definitividad, dado que los tribunales agrarios conocen de las controversias que surjan con motivo de las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que modifiquen, nulifiquen o extingan un derecho o una obligación.

Al respecto, este Tribunal Colegiado considera que tampoco le asiste la razón a la revisionista en lo que aduce, puesto que, no debe pasarse por inadvertido que la resolución de cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, es la que fundamentalmente se combate, de entre otros actos, es decir, una resolución dictada por una autoridad agraria con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma al artículo 27 de la Constitución General de la República, así como de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como acertadamente lo destacó la Juez de Distrito del conocimiento.

Por lo cual, los quejosos no estaban obligados a promover juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, dado que dicha resolución fue emitida en contravención a lo ordenado por el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional, que ordenó que las autoridades que conocieran de asuntos en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, deberán realizar los trámites necesarios y ponerlos en estado de resolución, debiéndolos remitir a los tribunales agrarios para que resuelvan en definitiva.

Advirtiéndose que en la especie, hasta el día cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, la responsable no había dictado resolución definitiva respecto de la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "José Silva Sánchez".

Cabe destacar que, no habiéndose formulado agravio alguno en contra del considerando cuarto reflejado en el segundo punto resolutivo de la sentencia que se recurre, mediante el cual se concedió la protección de la Justicia Federal al poblado quejoso, este Tribunal Colegiado considera que lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida".

VIII. ACUERDO DE INICIO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. La Unidad Técnico Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil tres, dejó insubsistente el acuerdo de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, emitido por la Dirección General de Procedimientos Agrarios, que declaró improcedente la creación de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "José Silva Sánchez", a ubicarse en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas.

IX. OPINIÓN DE LA REPRESENTACIÓN REGIONAL DEL NORESTE. Esta dependencia por oficios números 3135 y 8 de veintisiete de octubre de dos mil tres y nueve de enero de dos mil cuatro, respectivamente, solicitó información a la Representación Regional Golfo-Norte de la Comisión Nacional del Agua, para conocer las posibilidades de existencia de predios indemnizados que pudieran destinarse para satisfacer necesidades agrarias dentro del área del Distrito de Drenaje San Fernando, y por oficio B00.00.R.01.3.025/2004 de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro y B00.00.R.01.7.098/04 de dieciséis de junio del mismo año, dio respuesta en el sentido de que no existen predios que puedan ser puestos a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria para satisfacer necesidades agrarias de dicho núcleo.

Por lo anterior, dicha representación el veinticinco de junio de dos mil cuatro, en su opinión propuso negar la creación del nuevo centro de población ejidal por no existir predios legalmente afectables, y porque no se conocen presuntos terrenos nacionales que puedan contribuir a su creación. (Fojas 3 y 4 del legajo 2)

X. ACUERDO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil cuatro, el Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal, tuvo por cumplida la ejecutoria argumentando lo siguiente:

"Por lo anterior, se reitera que la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad responsable, dado que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, la quejosa fue restituida en el goce de las garantías que le fueron violadas, atendiendo las constancias de autos, toda vez que en cumplimiento de lo ordenado en el fallo protector, la autoridad dejó insubsistente el acto reclamado por el cual se ordenó el archivo del expediente agrario, y lo turnó al Tribunal Superior Agrario, para que emita la resolución correspondiente". (Legajo 5)

XI. ACUERDO COMPLEMENTARIO. La Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para solventar observaciones formuladas por el Tribunal Superior Agrario, en especial para corregir que por error en cumplimiento de ejecutoria, se dijo que se dejaba insubsistente el acuerdo de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y dos, siendo el correcto el de fecha cuatro de julio del mismo año, emitió acuerdo complementario el siete de marzo de dos mil seis, en los siguientes términos:

"PRIMERO.- En estricto cumplimiento al acuerdo de fecha 1 de octubre de 2004, emitido por el Tribunal Superior Agrario, vinculado con la ejecutoria pronunciada el 11 de junio de 2003, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Toca A.R. 189/2003, derivado del juicio de amparo número 361/2001, esta Unidad Técnica Operativa, tiene por insubsistente el acuerdo de fecha 4 de julio de 1992, dictado por la entonces Dirección General de Procedimientos Agrarios, que ordenó el archivo del expediente del nuevo centro de población ejidal de que se trata.

SEGUNDO. En su oportunidad, tórnese al Tribunal Superior Agrario y debidamente integrado, el expediente de la acción agraria en comento, para que emita la resolución que conforme a derecho proceda". (Legajo 5)

XII. ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. La Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria envió a este Tribunal Superior Agrario el expediente administrativo agrario 4795, compuesto de cuatro legajos en cuatrocientas cincuenta y un fojas, del nuevo centro de población ejidal que nos ocupa, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, y del estudio de los autos se encontró que no estaba debidamente integrado lo que dio lugar a que el primero de octubre dos mil cuatro, se emitiera el siguiente acuerdo:

"Devuélvase a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Unidad Técnica Operativa el expediente administrativo relativo a la solicitud de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez, a ubicarse en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, a fin de que se integre debidamente; y una vez que se encuentre en estado de resolución, sea enviado a este Tribunal Superior Agrario, para que resuelva lo que conforme a derechos corresponda". (Legajo 4)

XIII. DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por oficio número IX-109-201465 de veintiocho de junio de dos mil seis, el Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria, remitió el expediente a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Superior Agrario, integrado por cuatro legajos y tres carpetas, conteniendo entre

otras constancias cincuenta y seis resoluciones presidenciales y tres sentencias dictadas por este órgano colegiado, con las que se dotaron a diferentes poblados, con tierras comprendidas en el Distrito de Drenaje "San Fernando" sumando una superficie total de 49,370-06-97.38 (cuarenta y nueve mil trescientas setenta hectáreas, seis áreas, noventa y siete centiáreas, treinta y ocho miliáreas), que rebasan las 48,943-69-75.17 (cuarenta y ocho mil novecientas cuarenta y tres hectáreas, sesenta y nueve áreas, setenta y cinco centiáreas, diecisiete miliáreas), que la Comisión Nacional del Agua, puso a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer necesidades agrarias. (Foja de la 14 a la 16 del legajo 6).

XIV. ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. El veinticinco de abril de dos mil seis, este órgano colegiado emitió acuerdo ordenando remitir el expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Unidad Técnica Operativa relativo a la acción de nuevo centro de población ejidal, a fin de que lo integrara debidamente, y una vez que lo pusiera en estado de resolución lo remitiera al Tribunal Superior Agrario para que resolviera lo conducente.

XV. NUEVO ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. El doce de julio de dos mil seis, este órgano colegiado emitió acuerdo ordenando devolver el expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Unidad Técnica Operativa del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", a ubicarse en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, para su debida integración y una vez que se pusiera en estado de resolución lo devolviera a este Tribunal Superior Agrario para que resolviera lo que en derecho correspondiera, aduciendo que la Secretaría de la Reforma Agraria no había realizado el estudio pormenorizado en la entidad del que son vecinos los solicitantes, en términos del artículo 328 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en relación con el artículo 331 del mismo ordenamiento legal, asimismo para que recabara la opinión de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria en relación con el procedimiento del citado nuevo centro de población ejidal en la que debería tomar en consideración todas y cada una de las diligencias que ha realizado con la finalidad de integrar el expediente que nos ocupa. (Fojas 78 a 92 del legajo 6)

En cumplimiento del acuerdo señalado en el párrafo anterior, la Delegación Estatal en el estado de Tamaulipas, de la Secretaría de la Reforma Agraria emitió opinión el veintiocho de abril de dos mil nueve, en los siguientes términos:

"PRIMERO.- Es procedente la solicitud de creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", a establecerse en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, sin embargo es de negarse la acción agraria intentada, por falta de fincas afectables para constituirlo.

SEGUNDO.- Esta Delegación Estatal, tiene por integrado y en estado de resolución el expediente de la acción agraria de que se trata motivo por el cual se debe remitir el presente documento al C. Gobernador del estado de Tamaulipas, para que emita su opinión en el presente asunto.

TERCERO.- Remítase el expediente respectivo, con la presente opinión a la Dirección General Técnica Operativa de esta Secretaría, para los efectos legales procedentes". (Foja 3 a la 10 del legajo 8)

En cumplimiento del acuerdo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Técnica Operativa emitió opinión el dos de junio de dos mil nueve, en los siguientes términos:

"PRIMERO.- Esta Dirección General Técnica Operativa, considera debidamente cumplido el acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 12 de julio de 2006 y que el expediente de la acción agraria de que se trata, se encuentra debidamente integrado y en estado de resolución, motivo por el cual procede su remisión al citado órgano jurisdiccional, para que emita la resolución que en derecho proceda.

SEGUNDO.- Es procedente la solicitud de creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", a establecerse en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, pero debe negarse la acción agraria intentada, por falta de fincas afectables para constituirlo". (Foja 13 a la 18 del legajo 8)

XVI. TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATIVOS. El comité particular ejecutivo por ocursu de veintiocho de septiembre de dos mil siete, solicitó al Delegado Agrario en el estado, que se realizaran trabajos en el predio denominado "Los Gansos", municipio de Ciudad Mante, estado de Tamaulipas, el cual declararon tener en posesión parcial los promoventes. (Foja 15 del legajo 7).

XVII. INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Por oficio número BOO.00.R11.O2.-267/2008 de diez de septiembre de dos mil ocho, la comisión informó al Delegado Estatal, de la Secretaría de la Reforma Agraria, que el predio denominado "Los Gansos" del municipio de Ciudad Mante, estado de Tamaulipas, con superficie de 385-60-50-87 (trescientas ochenta y cinco hectáreas, sesenta áreas, cincuenta centiáreas, ochenta y siete miliares), se expropió por decreto presidencial de treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete y catorce de diciembre del mismo año, para el establecimiento del Distrito de Riego Pujal Coy, II Fase, e indemnizado su propietario Guillermo Uribe Reséndiz en el año de dos mil cinco. (Foja 7 del legajo 7).

XVIII. REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ PARTICULAR EJECUTIVO. Por asamblea celebrada el tres de junio de dos mil doce, se designaron a Tomás Saldaña García, Francisco Martínez Hernández y Alejandrina Ángeles García, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente, del comité particular ejecutivo. (Foja 7 del legajo 9).

XIX. INFORME SOBRE EL PREDIO "LOS GANSOS". Por oficio número B00.00.R11.O2.-315 de cinco de julio de dos mil doce, el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, informó a la Delegada Estatal Agraria en el estado de Tamaulipas, que el predio "Los Gansos", se revirtió de la expropiación pasando a ser propiedad privada. (Foja 10 del legajo 9).

Por oficio número 342 el Delegado Agrario en el estado, en respuesta a la orden de realizar trabajos técnicos informativos en el predio "Los Gansos", informó al Director de Procedimientos en la Dirección General Técnica Operativa, que en audiencia concedida a Tomás Saldaña representante del nuevo centro de población se le dieron a conocer los trabajos mencionados y manifestó su desacuerdo con los mismos, aduciendo que el predio se ubica en Ciudad Mante, Tamaulipas, y el grupo vive en el municipio de Abasolo, del mismo Estado, muy distante al del lugar donde radican y la superficie es insuficiente para satisfacer las necesidades agrarias de los solicitantes. (Foja 12 del legajo 9).

XX. TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATIVOS. Por oficio número 311 de quince de mayo de dos mil trece, el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el estado, comisionó al ingeniero Ignacio Hernández Ramírez a fin de que investigara el predio denominado "El Repelo", municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, propiedad de Jesús Benavides Fuentes, señalado por el grupo solicitante como de posible afectación; el comisionado rindió su informe el primero de julio del mismo año, señalando que se reunió con los integrantes del comité particular ejecutivo e intentó notificar al propietario del citado predio sin lograrlo, el cual cuenta con superficie de 1,762-87-92 (mil setecientos sesenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas), señaló que se ubicó en el predio y no encontró persona alguna dentro del mismo, que le pudiera recibir la notificación, procediendo a fijar la cédula de notificación en los accesos del predio, haciendo del conocimiento que el veinte de mayo del mismo año, darían inicio los trabajos citados, y una vez realizados encontró abandonado e inexplorado el predio, desde aproximadamente seis años y pudo observar que fue dedicado a la explotación ganadera, y actualmente enmontado en su mayoría por huizaches, observando dos presas, un corral, una bodega, un tanque elevado, seis casas, un papalote, línea de introducción de la luz, todo esto deteriorado y saqueado por el abandono.

Que en vía satelital identificó el predio y de acuerdo con los documentos aportados por el apoderado general para pleitos y cobranzas licenciada Perla Linda Hidalgo de Castro, arrojó una superficie de 1,872-29-19.351 (mil ochocientos setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un miliares) y acompañó el plano respectivo, que contiene el cuadro de construcción, siendo el coeficiente de agostadero elaborado por la Comisión Técnica Consultiva de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería de veinticuatro punto cincuenta hectáreas por unidad animal, por lo tanto, no rebasa los límites de la pequeña propiedad ganadera establecida por el artículo 249 fracción IV de la Ley Federal de Reforma Agraria. (Foja 72 del legajo 10).

El comisionado anexó a su informe el acta de inspección ocular practicada el veinte de mayo de dos mil trece, la cual contiene su firma y la del representante del grupo solicitante, también acompañó la respectiva acta de inexploración levantada en la misma fecha en la que consta la firma del comisionado y de dos testigos, en la que hizo constar que en el predio "El Repelo" se encontró el casco del predio totalmente destruido, y la superficie enmontada con árboles de huizache en lo general con una altura de cinco metros y con un diámetro de quince centímetros aproximadamente, y con estas dimensiones concluyó que el predio de que se trata, tenía aproximadamente seis años de inexploración por parte de su propietario contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicable en términos del numeral tercero transitorio de la Ley Agraria en vigor, firmada por el comisionado y con los testigos de asistencia. (Fojas 4 a 9 del legajo 10).

A foja 6 del legajo 11 obra la cédula de notificación recibida por la licenciada Perla Linda Hidalgo de Castro en su carácter de apoderada legal de Jesús Benavides Fuentes, haciéndole de su conocimiento que el siete de noviembre de dos mil catorce, se lanzó la primera convocatoria para celebrar asamblea con el núcleo solicitante la cual tendría verificativo el veintiuno del mismo mes y año.

XXI. ACTUALIZACIÓN CENSAL. Por asamblea general celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se actualizó el censo agrario por el licenciado Josué Enock Estrella Leyva, comisionado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, habiendo resultado veintiséis capacitados, de los cuales trece corresponden al censo original, y trece de quince que fueron censados en la asamblea de quince de mayo del citado año y once que comparecieron a la asamblea que solicitaron al comisionado que fueron agregados al censo, relacionándolos a todos y cada uno de ellos, señalando su edad, su nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, ocupación, estado civil, número de hijos, ingreso mensual, domicilio, documentos que acreditan la identidad, la firma o huella digital de los solicitantes. (Fojas de la 14 a 22 del legajo 11).

INFORME COMPLEMENTARIO: El ingeniero Ignacio Hernández Ramírez en su informe señaló que el siete de mayo de dos mil quince, elaboró las notificaciones a los propietarios de estas fracciones y no logró localizar a ninguno de los propietarios y notificó en el casco del rancho "El Repelo", cuyas cédulas de notificación fueron firmadas por el comisionado con la asistencia de dos testigos, obran a fojas de la 44 a la 53, del legajo 12, haciendo del conocimiento que los trabajos técnicos informativos tendrían verificativo el once del mismo mes y año, a las diez horas; en la fecha señalada se trasladó al predio citado en compañía del comité particular ejecutivo a realizar las investigaciones de campo, sin que se haya presentado ningún propietario, y procedió a elaborar nuevas actas de inspección ocular, de manera individual de cada fracción que comprende el predio conforme a las escrituras que fueron proporcionadas por el Instituto Registral y Catastral del estado; haciendo constar que todas las fracciones se encontraron en total abandono y sin explotación alguna desde aproximadamente seis años consecutivos, sin causa justificada; que también observó la infraestructura abandonada y deteriorada por el transcurso del tiempo, y levantó las actas de inexploración de todos y cada uno de los predios en donde consta la firma del comisionado y los testigos, así como la autoridad municipal del Ayuntamiento del estado de Tamaulipas, asentándose que todos los predios se encontraron inexplorados desde seis años aproximadamente, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria. (Fojas 60 a 65 del legajo 12), también anexó el plano topográfico del predio que contiene el cuadro de construcción. (Fojas de la 66 del legajo 12).

El mismo comisionado en su informe complementario dirigido al Delegado Agrario en el estado de Tamaulipas, el veintinueve de mayo de dos mil quince, señalando que elaboró las notificaciones a los propietarios conforme a la historia registral del predio denominado "El Repelo", propiedad de Jesús Benavides Fuentes quien lo adquirió con superficie de 1,762-87-92 (mil setecientos sesenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas), por donación efectuada en su favor por sus padres Edelmiro Benavides Cortes y Eva Fuentes de Benavides, mediante escritura pública número 670, otorgada en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en dicho lugar, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, mediante registro número 6,462, sección primera, el once de abril de mil novecientos setenta y nueve, en el Registro Público de la Propiedad en dicha ciudad, y realizó las siguientes ventas:

1. En favor de Javier Benavides Fuentes una superficie de 95-00-00 (noventa y cinco hectáreas), según inscripción registral número 19,318, legajo 387, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.
2. En favor de Jaime Benavides Fuentes una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), según inscripción registral número 19,319, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.
3. En favor de Edelmiro Benavides Cortes una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas) según inscripción registral número 19,321, legajo 387, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, quien a su vez donó toda la superficie en favor de su hijo Héctor Edelmiro Benavides Fuentes, según inscripción número 29,848, legajo 197, sección primera el once de junio de mil novecientos ochenta.
4. En favor de Rigomar Benavides Fuentes una superficie de 125-00-00 (ciento veinticinco hectáreas) según inscripción registral número 19,320, legajo 387, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas.
5. En favor de Dagoberto Benavides Fuentes transmitió 100-00-00 (cien hectáreas) según inscripción número 19,317, legajo 387, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas.

Todas las ventas anteriores hacen un total de 520-00-00 (quinientas veinte hectáreas), y se encuentran comprendidas dentro del plano elaborado que encierra las 1,872-29-19.351 (mil ochocientas setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas).

El comisionado ratificó en este informe que toda la superficie del predio "El Repelo" permaneció inexplorado por más de seis años, incluyendo la superficie, que el propietario enajenó, y para tal efecto levantó el acta de inspección ocular de la inexploración de las fracciones mencionadas, señalando que no se presentó persona alguna en la realización de la inspección ocular realizada en la fecha y hora programadas. (Fojas 5 a 9 del legajo 12).

OPINIÓN DEL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS: Este funcionario con base en los trabajos técnicos informativos y complementarios practicados por el ingeniero Ignacio Hernández Ramírez, quien rindió su informe el primero de julio de dos mil catorce, emitió opinión el veintiséis de junio de dos mil quince, declarando procedente la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", a ubicarse en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, señalando que existe la posibilidad de afectar en favor del núcleo agrario 1,872-29-19.351 (mil ochocientas setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas) de terrenos de agostadero del predio "El Repelo", propiedad de los hermanos Jesús, Javier, Jaime, Héctor, Edelmiro, Rigomar, Dagoberto de apellidos Benavides Fuentes, conforme a las fracciones que cada uno tiene.

En los términos del artículo 332 de la Ley Federal de Reforma Agraria se ordenó girar copias certificadas al Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas, para que emitiera su propia opinión, conforme a derecho y posteriormente con respuesta o sin ella se ordenó remitir las constancias a la Dirección General de la Propiedad Rural para al trámite correspondiente. (Fojas de la 75 a 92 del legajo 12).

OPINIÓN DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS: Dicho funcionario emitió su opinión el nueve de junio de dos mil quince, en los siguientes términos:

"ÚNICO.- Por las razones expuestas en la parte considerativa el titular de ejecutivo estatal no tiene inconveniente para la creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "José Silva Sánchez", en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, estimando que corresponde al Tribunal Superior Agrario determinar o no la procedencia de la acción intentada por el núcleo de población solicitante".

OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA TÉCNICA OPERATIVA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL, DE LA SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Esta dependencia del Ejecutivo Federal emitió su opinión el catorce de agosto de dos mil quince, en la que hizo una relatoría de las etapas procesales del procedimiento administrativo agrario y tomando en cuenta principalmente los trabajos técnicos informativos y complementarios practicados por el ingeniero Ignacio Hernández Ramírez, concluyó su opinión en lo siguiente:

"PRIMERO.- Se emite la presente opinión en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el 11 de junio de 2003, en el toca R.A. 189/2003, que confirmó la sentencia de fecha 26 de agosto de 2002, dictada por el C. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dentro del juicio de amparo número 361/2001, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos de que la entonces Dirección General Técnica Operativa, hoy Dirección General de la Propiedad Rural, realizara las diligencias necesarias para integrar debidamente el expediente de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, lo pusiera en estado de resolución y lo remitiera al Tribunal Superior Agrario, para que dictara la sentencia que en derecho proceda.

SEGUNDO.- De conformidad con los trabajos censales y técnicos e informativos realizados, así como de las demás constancias que obran en el expediente en cuestión, se considera procedente la solicitud de creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "José Silva Sánchez", municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, y que existe la posibilidad de afectar en favor del núcleo agrario en cuestión de una superficie de 1,872-29-19.351 hectáreas, de terrenos de agostadero del predio denominado "El Repelo", propiedad de las personas señaladas en el considerando VI de la presente opinión. Sin embargo, será el Tribunal Superior Agrario, quien determinará lo procedente al emitir la sentencia que en derecho corresponda.

TERCERO.- Por considerar que el expediente de la acción agraria de que se trata se encuentra debidamente integrado y en estado de resolución, remítase en compañía de la presente opinión al Tribunal Superior Agrario, para su resolución definitiva.

CUARTO.- Remítase copia certificada del presente proveído a la Delegación de esta Secretaría en el estado de Tamaulipas, para que por su conducto se notifique a los representantes del núcleo agrario solicitante en su lugar de residencia, del contenido del mismo". (Fojas de la 1 a 17 del legajo 13).

Por oficio número SSA/1881/2015 de catorce de octubre de dos mil quince, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario regresó el expediente al Director General de Asuntos Jurídicos de este Órgano Colegiado, a efecto de que lo remitiera a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por considerar que no estaba debidamente integrado ni en estado de resolución. (Fojas de la 21 a 26 del legajo 13).

Por oficio número 7403 de veintitrés de octubre de dos mil quince, el Director General de Asuntos Jurídicos devolvió el expediente al Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que diera debido cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de garantías número 361/2001, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al poblado quejoso, misma que fue confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca en revisión A.R. 189/2003, para que se diera cumplimiento a lo especificado en el oficio SSA/1881/2015 de la Secretaría General de Acuerdos. (Foja 20 del legajo 13).

Por oficio número REF:2010-DGPR-DGATO-DP52885 de cinco de noviembre de dos mil quince, el Director General Adjunto Técnico Operativo de la Dirección General de la Propiedad Rural solicitó al Delegado Agrario en Tamaulipas, subsanara las observaciones formuladas por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario.

Por oficio número 2636 de diecisiete de diciembre de dos mil quince, el Delegado Agrario en Tamaulipas, dio respuesta al Director General Adjunto Técnico Operativo de la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifestando que el grupo solicitante en asamblea celebrada el ocho del mismo mes y año, se inconformó con los acuerdos tomados por el Tribunal Superior Agrario en los que determinó devolver el expediente del nuevo centro de población ejidal a esta Secretaría de Estado, solicitando diversa información del Distrito de Drenaje "San Fernando", cuando el propio grupo promovente en asamblea celebrada el nueve de marzo de dos mil catorce, señaló como nuevo predio afectable el denominado rancho "El Repelo", municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, solicitando el estudio y análisis del expediente conforme a las últimas constancias y en su oportunidad se dictara la resolución correspondiente.

Por otra parte, por diversos oficios la Comisión Nacional del Agua de la cuenca Golfo-Norte y de la cuenca del Río Bravo informó a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria que dentro de la superficie expropiada no existe disposición para satisfacer necesidades agrarias porque no existen tierras disponibles en la actualidad, respecto a la solicitud de aclaración para determinar si son treinta y nueve o veinticinco los capacitados, del análisis de los trabajos censales practicados se encontró que el estudio de la capacidad agraria se realizó con treinta y nueve personas, de las cuales veintiséis manifestaron al comisionado tener como ocupación ser jornaleros en labores agrícolas y el resto que corresponde a trece de ellos manifestaron tener como ocupación habitual las labores del hogar, en este sentido se aclara que resultaron veintiséis campesinos con capacidad agraria.

En relación a la solicitud de practicar diligencias para aclarar si la superficie de 109-41-27.351 (ciento nueve hectáreas, cuarenta y un áreas, veintisiete centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas) deben considerarse como demasías propiedad de la Nación, mismas que se encuentran confundidas dentro de la superficie señalada como afectable y localizarla dentro del plano correspondiente, cabe aclarar que de acuerdo con los trabajos practicados por el ingeniero Ignacio Hernández Ramírez el veintiocho de mayo de dos mil quince, practicado el levantamiento topográfico del rancho denominado "El Repelo" arrojó una superficie de 1,872-29-19.351 (mil ochocientas setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas), el cual con los antecedentes registrales la superficie real que amparan los títulos de propiedad, es de 1,762-87-92 (mil setecientas sesenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas), propiedad de Jesús Benavides Fuentes y de sus causahabientes.

Sin embargo, del resultado de la investigación practicada por el comisionado y de las constancias de inexploración se conoce que toda la superficie del predio había permanecido inexplorado por más de seis años consecutivos, sin causa justificada como lo establece el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y que por esta razón no se realizó la investigación ni localización de las 109-41-27.351 (ciento nueve hectáreas, cuarenta y un áreas, veintisiete centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas), pues al estar confundidas dentro de la superficie de todo el predio y aunque del levantamiento topográfico arrojó una superficie mayor, ésta resulta afectable por el simple hecho de haberse encontrado inexplorada.

Por oficio número REF:II-210-DGEPR-DGAPO-DT65170 de veintidós de enero de dos mil dieciséis, el Director General Adjunto Técnico Operativo, de la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, envió a este Tribunal Superior Agrario el expediente administrativo 22/12508, relativo a la solicitud de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominara "José Silva Sánchez", que se ubicará en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, constante de siete legajos y seis carpetas en dos cajas, aduciendo dicho funcionario que con las actuaciones detalladas en el oficio de cuenta y con lo considerado por el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el estado de Tamaulipas, estima integrado el expediente de la acción agraria en cuestión, y subsanadas las observaciones formuladas por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario.

XXII. Por auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, se radicó el presente juicio en este Tribunal Superior Agrario, registrándose bajo el número 2/2016 y se turnó a la Magistratura Ponente para que en su oportunidad elaborara el proyecto de sentencia y lo sometiera a la consideración del pleno, asimismo, se ordenó enviar despacho al Tribunal Unitario Agrario Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, para que en auxilio de la labores de este órgano jurisdiccional, notificara el auto de radicación a los integrantes del comité particular ejecutivo del núcleo gestor; así como a Dagoberto, Javier, Jaime, Rigomar, Edelmiro y Jesús de apellidos Benavides Fuentes, propietarios del predio "El Repelo", ubicado en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, señalado como de posible afectación, requiriéndolos para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por encontrarse en este lugar la sede del Tribunal Superior Agrario, previniéndoles que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les harían por medio de rotulón fijados en los estrados de este órgano jurisdiccional. (Foja 88 del expedientillo de actuaciones).

Por auto de primero de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por notificado al comité particular ejecutivo, por haber comparecido ante este Tribunal Superior Agrario, señalando como domicilio para recibir notificaciones la calle de Misantla número 11, Delegación Cuauhtémoc, Roma Sur en la Ciudad de México.

Después de algunas diligencias el Tribunal Unitario Agrario Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, informó que no pudo notificar a los propietarios porque no pudieron ser localizados por desconocerse el domicilio.

Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Magistrada del Tribunal Superior Agrario en su carácter de Ponente e instructora de este juicio, tuvo a Jesús Benavides Fuentes señalando como domicilio, en la Calle Orinoco número 74-202 de la colonia Zacahuizto, Delegación Benito Juárez, código postal 03450, en la Ciudad de México, y autorizando para recibir notificaciones a los licenciados Rogelio Núñez Ramírez y Perla Linda Hidalgo de Castro, a quien se ordenó notificar personalmente.

Por otra parte, se ordenó girar oficio al Tribunal Unitario Agrario Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, para los efectos legales a que diera lugar, quedando en la espera de que remitieran las constancias de notificación y el auto de radicación a Dagoberto, Javier, Jaime, Rigomar y Edelmiro, todos de apellidos Benavides Fuentes, a fin de alegar lo que en derecho corresponda.

Con fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, acudió a este Tribunal Superior Agrario, Rogelio Núñez Ramírez autorizado para oír y recibir notificaciones por parte de Jesús Benavides Fuentes, quien se identificó con credencial para votar con fotografía número IDMEX1203783255, expedida por el Instituto Nacional Electoral y se dio por notificado del auto de radicación de cinco de febrero y del acuerdo de cuatro de julio, ambos de dos mil dieciséis, recibiendo las constancias respectivas, que obran a fojas de la 122 a 127 del cuadernillo de actuaciones del Tribunal Superior Agrario.

Por su parte Rigomar, Javier, Edelmiro, Dagoberto y Jaime todos de apellidos Benavides Fuentes, fueron notificados mediante instructivo, entregándoseles copia de los acuerdos de cinco de febrero y del uno de agosto de dos mil dieciséis, y las diligencias fueron entendidas con Juana María Hernández H., quien dijo ser empleada doméstica y se identificó con credencial de elector número 0698025652L33, cédulas de notificación que obran a fojas de la 148 a 157, del cuadernillo de actuaciones del Tribunal Superior Agrario; y

CONSIDERANDO:

1. Que este Tribunal Superior Agrario es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1, 9, fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

2. Que la capacidad agraria individual y colectiva de los solicitantes, quedó acreditada de conformidad con los artículos 198 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con los trabajos de actualización censal practicados el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por el licenciado Josué Enock Estrella Leyva, quien

relacionó treinta y nueve personas de las cuales veintiséis reunieron los requisitos que establece el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, siendo los siguientes: 1. Olga Esther Tovar Sánchez. 2. Jorge Cruz Martínez. 3. José Luis Polanco Castro. 4. Mario Cruz Martínez. 5. Francisco Martínez Sánchez. 6. Francisco Martínez Hernández. 7. Emilio Falcón Gasca. 8. Eustaquio Flores Narváez. 9. Francisco Martínez Rodríguez. 10. Remedios Ortíz Estrada. 11. Alfredo Bernal Reséndiz. 12. Gonzalo Padilla Chairez. 13. Pedro Salazar Rodríguez. 14. Refugio Cervantes Segura. 15. Rony Antonio Cepeda Tovar. 16. Alfonso Garza Carrizales. 17. José Antonio López Cabrera. 18. Tomás Saldaña García. 19. Guadalupe Garza Carrizales. 20. Castali Guadalupe Jiménez. 21. Clara Jiménez Zavala. 22. Jorge Alejandro López Cabrera. 23. Venancio Rodríguez Ayala. 24. Jesús Acuña Guevara. 25. Irma Pérez Picón. 26. Bartolomé Rodríguez Barreras.

El artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria establece lo siguiente:

“ARTICULO 200.- Tendrá capacidad para obtener unidad de dotación por los diversos medios que esta Ley establece, el campesino que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, mayor de dieciséis años, o de cualquier edad si tiene familia a su cargo;

II.- Residir en el poblado solicitante por lo menos desde seis meses antes de la fecha de la presentación de la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio, excepto cuando se trate de la creación de un nuevo centro de población o del acomodo en tierras ejidales excedentes;

III.- Trabajar personalmente la tierra, como ocupación habitual;

IV.- No poseer a nombre propio y a título de dominio tierras en extensión igual o mayor al mínimo establecido para la unidad de dotación;

V.- No poseer un capital individual en la industria o en el comercio mayor de diez mil pesos, o un capital agrícola mayor de veinte mil pesos; y

VI.- No haber sido condenado por sembrar, cultivar o cosechar marihuana, amapola, o cualquier otro estupefaciente”.

Del número de censados trece no reunieron la capacidad agraria, por no reunir el requisito de la fracción III del artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que señala que tiene capacidad agraria quien trabaje personalmente la tierra, como ocupación habitual, y la siguiente relación de censados manifestaron dedicarse a las labores del hogar, siendo las siguientes: 1. Martha Alicia Polanco Castro. 2. Flora Cruz Martínez. 3. Ruth Estrada Barrón. 4. María del Carmen Roque López. 5. Francisca Garza Carrizales. 6. Alberta Carrizales Saldaña. 7. Elizabeth Garza Orozco. 8. Rosa Isela Juárez Torres. 9. María Elena Polanco Castro. 10. María Teresa Bernal Garza. 11. María de Jesús Martínez Torres. 12. Magdalena Morales Ramírez. 13. Irma Polanco Castro.

3. Que el procedimiento se ajustó a lo que para tal efecto establecen los artículos 244, 327, 328, 332, 333 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual resulta aplicable en los términos del citado artículo tercero transitorio del decreto de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos.

4. Analizadas las actuaciones del procedimiento administrativo agrario, se llega al conocimiento que no existe fecha de la solicitud de nuevo centro de población ejidal, el cual fue instaurado el diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, bajo el número 4795 y publicada la solicitud en el Diario Oficial de la Federación el quince del mismo mes y año, acreditándose la capacidad agraria con la diligencia censal practicada el dieciocho de mayo del citado año, a la que asistieron treinta y cuatro campesinos capacitados; y designaron como representantes del comité particular ejecutivo a Simón Polanco González, Francisco Martínez Hernández y Refugio Cervantes Gómez, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente.

Este comité fue reestructurado por asamblea celebrada el tres de junio de dos mil doce, habiéndose designado a Tomás Saldaña García, Francisco Martínez Hernández y Alejandrina Ángeles García, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Resulta trascendente mencionar que el procedimiento permaneció suspendido por varios años, desde el año de mil novecientos ochenta y dos hasta el cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, cuando la Dirección General de Procedimientos Agrarios emitió opinión declarando improcedente la solicitud formulada por los promoventes e improcedente la creación del nuevo centro de población ejidal, argumentando que los solicitantes no cumplieron con lo previsto por el artículo 244 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que establece:

“ARTICULO 244.- Procederá la creación de un nuevo centro de población, cuando las necesidades del grupo capacitado para constituirlo no puedan satisfacerse por los procedimientos de restitución, dotación o ampliación de ejidos, o de acomodo en otros ejidos”.

Además estableció que los predios señalados como afectables ubicados en el sistema de drenaje San Fernando, no habían sido puestos a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer necesidades agrarias y que por otra parte, el Departamento Técnico de dicha Dirección, al llevar a cabo el análisis técnico del expediente que nos ocupa, con base en las carpetas topográficas y datos proporcionados por el catastro rural, de la Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el estado de Tamaulipas, no localizó predios afectables que pudieran satisfacer las necesidades agrarias del grupo promovente.

Además con los informes solicitados al Delegado Agrario en la entidad, dicho funcionario señaló que eran nulas las posibilidades de contar con superficie afectable, por lo que por acuerdo de cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, la Dirección General de Procedimientos Agrarios, ordenó archivar el expediente como asunto concluido, ante la imposibilidad de contar con superficies para satisfacer las necesidades agrarias del grupo promovente.

El acuerdo de archivo fue impugnado a través del juicio de garantías número 361/2001, del cual conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y dictó sentencia decretando el sobreseimiento y por otra parte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que las autoridades responsables continuaran con el procedimiento agrario, para que una vez que se pusiera en estado de resolución, se turnara al Tribunal Agrario correspondiente para la resolución definitiva.

La sentencia anterior se impugnó mediante el recurso de revisión del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca número R.A. 189/2003-2426, y por ejecutoria de once de julio de dos mil tres, confirmó la sentencia impugnada.

Para dar cumplimiento a la ejecutoria la Unidad Técnico Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil tres, pretendió dejar insubsistente el acuerdo de archivo pero citó equivocadamente la fecha de dicha resolución, por lo tanto para subsanarlo emitió otro acuerdo complementario el siete de marzo de dos mil seis, dejando insubsistente el acuerdo de archivo dictado el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos.

Lo anterior dio lugar a que el Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil cuatro, tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo de referencia.

También obra en autos del procedimiento la opinión de la Representación Regional del Noreste, la cual emitió con la información proporcionada por la Representación Regional Golfo-Norte de la Comisión Nacional del Agua, en relación con los predios solicitados del drenaje “San Fernando”, en el sentido de que no existen predios en esta área que pudieran ser puestos a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer necesidades agrarias, por lo que dicha dependencia del Ejecutivo Federal el veinticinco de junio de dos mil cuatro, emitió opinión negando la creación del nuevo centro de población ejidal por falta de predios afectables.

El Tribunal Superior Agrario dictó diversos acuerdos el primero de octubre de dos mil cuatro, veinticinco de abril y doce de julio de dos mil seis, ordenando devolver el expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Unidad Técnica Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, todos con la finalidad de que se integrara debidamente el expediente materia de nuestro estudio.

Derivado de lo anterior la Delegación Estatal en el estado de Tamaulipas de la Secretaría de la Reforma Agraria el veintiocho de abril de dos mil nueve, declaró que el procedimiento agrario se encontraba debidamente integrado y en estado de resolución y ordenó remitir los autos al Gobernador del estado para que emitiera su opinión, así como a la Unidad Técnica Operativa para los efectos legales procedentes.

Como se señala en antecedentes de esta sentencia, el comité particular ejecutivo por curso de veintiocho de septiembre de dos mil siete, solicitó al Delegado Agrario en el estado, que se realizaran trabajos técnicos informativos en el predio denominado “Los Gansos”, ubicado en el municipio de Ciudad Mante, estado de Tamaulipas, sobre el cual la Comisión Nacional del Agua informó que había sido expropiado por decreto presidencial de treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete y catorce de diciembre del mismo año, propiedad de Guillermo Uribe Reséndiz, para el establecimiento del Distrito de Riego Pujal Coy, II Fase, el cual con fecha posterior pasó a ser propiedad privada; la investigación de este predio se suspendió toda vez que Tomás Saldaña, representante del Nuevo Centro de Población se inconformó con los mismos, aduciendo que el predio se ubicaba en Ciudad Mantes, estado de Tamaulipas, lugar muy distante al municipio de Abasolo donde radican los solicitantes, del mismo estado, y además porque la superficie es insuficiente para satisfacer las necesidades agrarias de los promoventes, y en su lugar solicitó el representante que se investigara el predio denominado “El Repelo”, como de posible afectación.

5. En este orden de ideas por lo que respecta al predio denominado "Los Gansos" que fue investigado en el inicio del procedimiento agrario, cuyo estudio se suspendió a petición del representante legal del comité particular ejecutivo del grupo promovente, resulta inafectable toda vez que se encuentra ubicado a mucha distancia del lugar de la residencia de los solicitantes, y además como lo mencionan resulta insuficiente para satisfacer necesidades agrarias.

A mayor abundamiento el predio denominado "Los Gansos" resulta inafectable, porque aun cuando en las acciones de nuevos centros de población ejidal, no se estudie el radio legal de los predios que se concedan no pueden ubicarse a distancias considerables de la zona urbana, como lo adujo el grupo solicitante, resultando aplicable en cuanto a la distancia lo previsto por el artículo 203 de la Ley Federal de Reforma Agraria que establece: "**Todas las fincas cuyos linderos sean tocados por un radio de siete kilómetros a partir del lugar más densamente poblado del núcleo solicitante, serán afectables para fines de dotación o ampliación ejidal en los términos de esta Ley**"; en el caso que nos ocupa los propios campesinos a través de su representante legal manifestaron que el predio se encontraba a una distancia considerable, por lo que se desistieron para que se siguiera considerando como afectable.

Por otra parte, en relación con los predios ubicados en el Distrito de Drenaje "San Fernando" señalado como afectable en la solicitud de nuevo centro de población ejidal, el Delegado Agrario del Registro Agrario Nacional en el estado, por oficio número ST/017/06-373 de dieciocho de enero de dos mil seis, hizo del conocimiento del Representante Regional del Noroeste de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que dentro del Distrito de temporal tecnificado número 10 San Fernando, se emitieron cincuenta y ocho resoluciones presidenciales para igual número de nuevos centros de población ejidal, anexando la relación en la que se indica: la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la superficie concedida, la fecha de ejecución y la superficie ejecutada, así como el nombre del poblado.

A continuación se transcribe la relación proporcionada por el Registro Agrario Nacional, de los poblados beneficiados señalando la superficies concedidas, en el Distrito de Drenaje "San Fernando" que inicialmente fue solicitada por el grupo promovente y con la que se demuestra que la superficie concedida es mayor a la que se puso a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer necesidades agrarias:

No.	MUNICIPIO	POBLADO	ACCIÓN	FECHA PUB. DEL D.O.F.	SUP. RES. PRES (Has)	FECHA EJECUCIÓN	SUPERF. EJECUTADA (Has)
1.	REYNOSA	REFORMA AGRARIA	NCPE	06/08/87	1,162.829900	29/09/87	1,162.829900
2.	REYNOSA	NUEVA LIBERTAD CAMPESSINA II	NCPE	06/08/87	725.974300	12/01/88	725.974300
3.	REYNOSA	CANDELARIO REYES	NCPE	31/12/87	514.000000	27/11/89	514.000000
4.	REYNOSA	LA PALMA	NCPE	09/11/89	703.549800	07/12/90	703.549800
5.	REYNOSA	FRANCISCO I. MADERO	NCPE	16/07/69	4,035.000000	22/12/80	300.000000
6.	REYNOSA	LAS ANACUAS II	NCPE	16/11/94	400.000000	04/12/94	391.160100
7.	REYNOSA	FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL	NCPE	21/12/87	1,021.618200	07/07/88	1,021.618200
8.	REYNOSA	SANTO NIÑO	DOT	18/12/69	350.000000	29/09/64	350.000000
9.	REYNOSA	SAN ANTONIO ANTES FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL	NCPE	21/12/87	781.000000	20/07/89	781.000000
10.	REYNOSA	PALOS BLANCOS	NCPE	24/08/88	1,000.000000	31/10/88	1,005.521700
11.	REYNOSA	LA AZUFROSA	NCPE	01/06/88	500.000000	05/10/88	499.458650
12.	REYNOSA	NUEVO TLAXCALA XICOTENCATL	NCPE	21/12/87	932.372700	14/04/89	932.372700

No.	MUNICIPIO	POBLADO	ACCIÓN	FECHA PUB. DEL D.O.F.	SUP. RES. PRES (Has)	FECHA EJECUCIÓN	SUPERF. EJECUTADA (Has)
13.	REYNOSA	NUEVO SAN FRANCISCO	NCPE	24/08/88	700.000000	20/04/89	700.000000
14.	REYNOSA	JAVIER V. BONFIL	NCPE	24/08/88	478.000000	04/10/93	478.000000
15.	REYNOSA	ESCUADRÓN 201 I	NCPE	24/08/88	622.934000	20/04/89	622.934000
16.	REYNOSA	ESCUADRÓN 201 II	NCPE	24/08/88	441.941600	22/04/89	441.823200
17.	REYNOSA	NUEVA LEY DE REFORMA AGRARIA	NCPE	06/08/87	719.988900	24/04/89	719.988900
18.	REYNOSA	ARTÍCULO VEINTISIETE CONSTITUCIONAL	NCPE	21/12/87	817.615000	20/03/88	817.615000
19.	MÉNDEZ	MÁRTIRES DEL CAMPO	NCPE	06/08/87	778.501400	30/05/89	778.501400
20.	REYNOSA	FRANCISCO ZARCO	NCPE	06/08/87	549.090900	05/10/87	549.090900
21.	REYNOSA	GENERAL ÁNGEL FLORES	NCPE	07/08/87	498.886600	10/01/94	498.886600
22.	REYNOSA	GENERAL ÁNGEL FLORES II	NCPE	07/08/87	496.960000	18/01/94	496.960000
23.	REYNOSA	NUEVA LIBERTAD CAMPESINA II	NCPE	06/08/87	725.974300	12/01/88	725.974300
24.	REYNOSA	VICENTE GUERRERO	NCPE	23/12/87	960.000000	01/09/89	960.000000
25.	REYNOSA	EMILIO PORTES GIL	NCP	31/12/87	527.548500	04/04/89	527.548500
26.	REYNOSA	MANUEL SILVA BALDERAS	NCPE	31/12/87	400.000000	10/10/88	400.000000
27.	REYNOSA	EL SOLISEÑO Y SUS ANEXOS	NCPE	03/12/98	664.442729	15/02/98	647.672300
28.	MÉNDEZ	MÁRTIRES DEL CAMPO II	NCPE	07/08/87	396.000000	30/05/89	395.868100
29.	MÉNDEZ	PRESIDENTE LUIS ECHEVERRÍA	NCPE	26/05/83	1,860.000000	26/07/85	1,860.000000
30.	MÉNDEZ	ESPIADEROS II	NCPE	09/11/89	2,140.000000	14/12/89	2,140.000000
31.	REYNOSA	JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	NCPE	07/08/87	410.930800	29/09/87	410.930800
32.	REYNOSA	EMILIANO ZAPATA III	NCPE	24/05/90	348.501300	15/08/90	348.501300
33.	REYNOSA	PROFR. BALTAZAR DÍAZ BAZÁN I	NCPE	29/01/88	1,319.156400	13/03/88	1,319.156400
34.	REYNOSA	PROFR. BALTAZAR DÍAZ BAZÁN II	NCPE	24/08/88	737.886500	19/06/89	737.886500
35.	REYNOSA	PROFR. BALTAZAR DÍAZ BAZÁN III	NCPE	24/08/88	323.854300	23/06/89	323.854300
36.	REYNOSA	IDEALES DE LA REVOLUCIÓN	NCPE	07/08/87	396.757500	29/09/87	396.757546

No.	MUNICIPIO	POBLADO	ACCIÓN	FECHA PUB. DEL D.O.F.	SUP. RES. PRES (Has)	FECHA EJECUCIÓN	SUPERF. EJECUTADA (Has)
37.	REYNOSA	GALEANA I	NCPE	01/06/88	699.498500	07/06/89	699.498500
38.	REYNOSA	GALEANA II	NCPE	02/06/88	334.180000	06/06/89	334.180000
39.	REYNOSA	20 DE MAYO II	NCPE	06/08/87	754.779800	08/12/88	754.779800
40.	REYNOSA	EL GRULLO	DOT	04/11/94	1,361.792100	30/09/94	1,361.792100
41.	REYNOSA	GRAL. ANACLETO GUERRERO	NCPE	13/02/89	971.873400	23/05/90	971.873400
42.	REYNOSA	20 DE MAYO I	NCPE	06/08/87	1,377.011600	11/10/86	1,392.801700
43.	REYNOSA	DOROTEO ARANGO II	NCPE	25/05/87	811.450000	08/10/87	811.450000
44.	REYNOSA	16 DE SEPTIEMBRE II	NCPE	07/08/87	408.520000	30/06/88	408.520000
45.	REYNOSA	GRAL PEDRO MARÍA ANAUYA ANTES LÁZARO CÁRDENAS	NCPE	06/08/87	1,760.694600	28/09/87	1,760.694600
46.	REYNOSA	EMILIANO ZAPATA I	NCPE	26/08/88	552.611600	12/10/90	552.611600
47.	MÉNDEZ	PEDRO J. MÉNDEZ	NCPE	03/03/66	1,100.000000	28/09/83	1,103.145200
48.	MÉNDEZ	GRAL. LÁZARO CÁRDENAS II	NCPE	01/06/88	527.583000	18/04/89	527.583000
49.	REYNOSA	CONGREGACION GARZA	AMPL.	03/04/89	2,742.216800	09/06/89	2,742.216800
50.	MÉNDEZ	EL MOQUETITO	NCP	13/10/89	582.120600	28/11/89	582.120600
51.	MÉNDEZ	MIGUEL HIDALGO	NCPE	09/11/89	534.818100	05/01/90	534.818100
52.	REYNOSA	EMILIANO ZAPATA II	NCPE	09/08/90	313.757700	12/10/90	313.757700
53.	REYNOSA	LOS TREVIÑO	NCPE	24/08/88	424.443300	16/10/89	423.695100
54.	REYNOSA	LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ	NCPE	09/11/89	499.758500	20/09/91	499.758500
55.	REYNOSA	CORONEL ANICETO LÓPEZ SALAZAR	NCPE	25/03/96	829.841700	04/12/95	829.841700
56.	REYNOSA	20 DE MAYO III	NCPE	06/08/87	1,192.628200	12/01/87	1,192.628200
57.	REYNOSA	PLAN DE AYALA II	NCPE	09/11/89	800.000000	12/12/89	800.000000
58.	REYNOSA	PLAN DE AYALA I	NCPE	09/11/89	1,500.000000	19/12/89	1,500.000000

Como se advierte sumando las afectaciones agrarias señaladas en el cuadro anterior y que fueron concedidas para crear los nuevos centros de población ejidal, en el Distrito de San Fernando, suman una superficie total de 50,052-47-81 (cincuenta mil hectáreas, cincuenta y dos áreas, cuarenta y siete centiáreas, ochenta y un milíáreas), excediendo la superficie de 48,511-40-94 (cuarenta y ocho mil hectáreas, quinientas once áreas, cuarenta áreas, noventa y cuatro centiáreas) que la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos puso a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer necesidades agrarias con lo cual se demuestra que no existe superficie disponible para beneficiar al grupo solicitante. Al informe del Registro Agrario Nacional se le concede valor pleno en los términos del artículo 150 de la Ley Agraria y 89 del Reglamento del Registro Agrario Nacional que establece que las constancias que expida dicha dependencia harán prueba plena en juicio y fuera de él.

6. Como consecuencia de la renuncia del grupo solicitante para que se continuara con la investigación del predio denominado "Los Gansos", a solicitud del mismo se ordenó realizar trabajos técnicos informativos en el predio denominado "El Repelo", cuyos trabajos fueron realizados por el ingeniero Ignacio Hernández Ramírez quien rindió su informe el primero de julio de dos mil catorce, del que se desprende que el predio inicialmente fue propiedad de Jesús Benavides Fuentes, quien lo adquirió con superficie de 1,762-87-92 (mil setecientos sesenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas), por donación efectuada en su favor por sus padres Edelmiro Benavides Cortes y Eva Fuentes de Benavides, mediante escritura pública número 670, otorgada en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en dicho lugar, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, mediante registro número 6,462, sección primera, el once de abril de mil novecientos setenta y nueve, en el Registro Público de la Propiedad en dicha ciudad, quien realizó las siguientes ventas:

1. En favor de Javier Benavides Fuentes dos fracciones, la primera, de 95-00-00 (noventa y cinco hectáreas), mediante escritura pública número 814, el trece de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, otorgada en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número 19,318, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

2. En favor de Jaime Benavides Fuentes una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), mediante escritura pública número 813, el trece de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 19,319, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

3. En favor de Rigomar Benavides Fuentes una superficie de 125-00-00 (ciento veinticinco hectáreas), mediante escritura pública número 815, el catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 19,320, legajo 387, sección primera, el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas.

4. En favor de Dagoberto Benavides Fuentes transmitió 100-00-00 (cien hectáreas), mediante escritura pública número 816, el quince de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 19,317, legajo 387, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas.

5. En favor de Edelmiro Benavides Cortes transmitió una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), mediante escritura pública número 817, el quince de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 19,321, legajo 387, sección primera el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, quien a su vez donó toda la superficie en favor de su hijo Héctor Edelmiro Benavides Fuentes, mediante escritura pública número 920, el veintiuno de abril de mil novecientos ochenta, otorgada ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en la Ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 29848, legajo 197, sección primera el once de junio del mismo año.

A solicitud de los promoventes fue comisionado el ingeniero Ignacio Hernández Ramírez, para que investigara el predio denominado "El Repelo", ubicado en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, quien rindió dos informes de primero de julio de dos mil catorce y veintinueve de mayo de dos mil quince, en el primero de ellos en el acta respectiva hizo constar que encontró el casco del predio totalmente destruido, y la superficie enmontada con árboles de huizache en lo general con una altura de cinco metros y con un diámetro de quince centímetros aproximadamente, y con estas dimensiones concluyó que el predio de que se trata, tenía aproximadamente seis años de inexploración por parte de su propietario.

En el segundo informe hizo constar que se trasladó al predio citado en compañía del comité particular ejecutivo a realizar las investigaciones de campo, sin haberse presentado ningún propietario, y procedió a elaborar de manera individual nuevas actas de inspección ocular, de cada una de las fracciones que

comprende el predio conforme a las escrituras que fueron proporcionadas por el Instituto Registral y Catastral del estado; haciendo constar que todas las fracciones se encontraron en total abandono y sin explotación alguna desde aproximadamente seis años consecutivos, sin causa justificada; que también observó la infraestructura abandonada y deteriorada por el transcurso del tiempo, levantando las actas de inexploración de todos y cada uno de los predios en donde consta la firma del comisionado y de los testigos, así como de la autoridad municipal del Ayuntamiento de Abasolo, del estado de Tamaulipas, asentándose que todos los predios se encontraron inexplorados por un periodo de aproximadamente seis años, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria y levantó el plano topográfico identificando las fracciones del predio, levantando el cuadro de construcción respectivo.

A estos informes se les concede valor pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Agraria, por haberse elaborado por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones, y con ello se demuestra que el predio denominado "El Repelo", resulta afectable por haber permanecido inexplorado por más de dos años consecutivos sin causa justificada, contraviniendo lo establecido por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que establece:

"ARTÍCULO 251.- Para conservar la calidad de inafectable, la propiedad agrícola o ganadera no podrá permanecer sin explotación por más de dos años consecutivos, a menos que existan causas de fuerza mayor que lo impidan transitoriamente, ya sea en forma parcial o total. Lo dispuesto en este artículo no impide la aplicación, en su caso, de la Ley de Tierras Ociosas y demás leyes relativas".

Cabe señalar que no obstante que los propietarios del predio denominado "El Repelo", fueron notificados en el procedimiento agrario, no comparecieron a ofrecer prueba alguna para desvirtuar la causal de inexploración, con base en la cual se determina la afectación del mismo.

7. Por otra parte, en autos del procedimiento administrativo agrario las dependencias del Ejecutivo Federal en la materia, así como el Gobernador del estado de Tamaulipas, emitieron opiniones las cuales aun cuando no son vinculatorias, resulta relevante hacer referencia a ellas, mencionando el sentido de las mismas, en el siguiente orden:

El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió opinión el veintiséis de junio de dos mil quince, declarando procedente la solicitud de creación del citado nuevo centro de población ejidal, señalando que existe la posibilidad de afectar en favor del núcleo agrario 1,872-29-19.351 (mil ochocientas setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un milíareas) del predio denominado "El Repelo".

El Gobernador Constitucional en el estado de Tamaulipas, emitió opinión el nueve de julio de dos mil quince, manifestando que no tiene inconveniente con la creación del nuevo centro de población ejidal, estimando que corresponde al Tribunal Superior Agrario determinar o no la procedencia de la acción intentada por el núcleo de población solicitante.

La Dirección de Procedimiento de la Dirección General Adjunta Técnica y Operativa de la Dirección General de la Propiedad Rural de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el catorce de agosto de dos mil quince, apartándose de sus anteriores opiniones, consideró procedente la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal señalando que existe la posibilidad de afectar en favor del núcleo agrario una superficie de 1,872-29-19.351 (mil ochocientas setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un milíareas) de terrenos de agostadero del predio denominado "El Repelo", propiedad de las personas anteriormente señaladas, dejando a este Tribunal Superior Agrario la libertad de determinar lo procedente de emitir la sentencia que en derecho corresponda.

En este orden de ideas de lo actuado en el expediente agrario de mérito, quedó plenamente acreditado que el predio denominado "El Repelo", resulta afectable el cual fue propiedad de Jesús Benavides Fuentes, quien lo adquirió con superficie de 1,762-87-92 (mil setecientos sesenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas), por donación efectuada en su favor por sus padres Edelmiro Benavides Cortes y Eva Fuentes de Benavides, mediante escritura pública número 670, otorgada en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, ante la fe del licenciado Abelardo Guerra Farías, notario público número 131, en dicho lugar, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, mediante registro número 6,462, sección primera, el once de abril de mil novecientos setenta y nueve, en el Registro Público de la Propiedad en dicha ciudad.

8. Con base en todo lo anterior, procede conceder por concepto de dotación para la creación del nuevo centro de población ejidal, una superficie total de 1,872-29-19.351 (mil ochocientos setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas) de terrenos de agostadero del predio denominado "El Repelo", ubicado en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, misma que son afectables a propiedad de:

1. Jesús Benavides Fuentes, una superficie de 1,242-87-92 (mil doscientas cuarenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas);

2. Javier Benavides Fuentes, una superficie de 95-00-00 (noventa y cinco hectáreas);

3. Jaime Benavides Fuentes, una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas);

4. Rigomar Benavides Fuentes, una superficie de 125-00-00 (ciento veinticinco hectáreas);

5. Dagoberto Benavides Fuentes, una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas);

6. Héctor Edelmiro Benavides Fuentes, una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas) y

7. Propiedad de la Nación, 109-41-27.351 (ciento nueve hectáreas, cuarenta y un áreas, veintisiete centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas), que corresponden a excedencias, conforme a los artículos 5 fracción II y 6 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, expedida el treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, aplicada transitoriamente en los términos de los artículos tercero transitorio del decreto de reformas al artículo 27 constitucional, promulgado el dos de enero de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis del mismo mes y año y de la Ley Agraria promulgada el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis del mismo mes y año, afectable en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La superficie que se concede pasará a ser propiedad de los veintiséis campesinos capacitados relacionados en el considerando segundo de esta sentencia, superficie que deberá ser localizada de acuerdo al plano proyecto que para tal efecto se elabore.

En cuanto a la determinación del destino de las tierras la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente.

9. A efecto de crear la infraestructura económica y social indispensable para el sostenimiento y desarrollo de nuevo centro de población ejidal como son: las vías de acceso necesarias, de servicios de correos, telégrafo, teléfono, establecimiento de hospitales, centros de salud, escuelas, áreas de recreación, unidad de aguas y red de agua potable, la asesoría para el desarrollo agropecuario, estudios geohidrológicos, créditos que deben otorgar los bancos oficiales de crédito, y demás necesarias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 248 de la Ley Federal de Reforma Agraria, deberán intervenir en el área de sus respectivas competencias, las siguientes dependencias oficiales: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno del estado de Tamaulipas.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria, y 1, 9, así como la fracción II, del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente y fundada la creación del nuevo centro de población ejidal, denominado "José Silva Sánchez", ubicado en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Es de dotarse y se dota al poblado mencionado por concepto de nuevo centro de población ejidal una superficie de 1,872-29-19.351 (mil ochocientos setenta y dos hectáreas, veintinueve áreas, diecinueve centiáreas, trescientas cincuenta y un miliáreas) de terrenos de agostadero del predio denominado "El Repelo", ubicado en el municipio de Abasolo, estado de Tamaulipas, misma que son afectables a propiedad de:

1. Jesús Benavides Fuentes, una superficie de 1,242-87-92 (mil doscientas cuarenta y dos hectáreas, ochenta y siete áreas, noventa y dos centiáreas);

2. Javier Benavides Fuentes, una superficie de 95-00-00 (noventa y cinco hectáreas);

3. Jaime Benavides Fuentes, una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas);

4. Rigomar Benavides Fuentes, una superficie de 125-00-00 (ciento veinticinco hectáreas);

5. Dagoberto Benavides Fuentes, una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas);

6. Héctor Edelmiro Benavides Fuentes, una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas) y

7. Propiedad de la Nación, 109-41-27.351 (ciento nueve hectáreas, cuarenta y un áreas, veintisiete centiáreas, trescientas cincuenta y un milíáreas), que corresponden a excedencias, conforme a los artículos 5 fracción II y 6 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, expedida el treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, aplicada transitoriamente en los términos de los artículos tercero transitorio del decreto de reformas al artículo 27 constitucional, promulgado el dos de enero de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis del mismo mes y año y de la Ley Agraria promulgada el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis del mismo mes y año, afectable en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La superficie que se conceda pasará a ser propiedad de los veintiséis campesinos capacitados siendo: 1. Olga Esther Tovar Sánchez. 2. Jorge Cruz Martínez. 3. José Luis Polanco Castro. 4. Mario Cruz Martínez. 5. Francisco Martínez Sánchez. 6. Francisco Martínez Hernández. 7. Emilio Falcón Gasca. 8. Eustaquio Flores Narváez. 9. Francisco Martínez Rodríguez. 10. Remedios Ortíz Estrada. 11. Alfredo Bernal Reséndiz. 12. Gonzalo Padilla Chairez. 13. Pedro Salazar Rodríguez. 14. Refugio Cervantes Segura. 15. Rony Antonio Cepeda Tovar. 16. Alfonso Garza Carrizales. 17. José Antonio López Cabrera. 18. Tomás Saldaña García. 19. Guadalupe Garza Carrizales. 20. Castali Guadalupe Jiménez. 21. Clara Jiménez Zavala. 22. Jorge Alejandro López Cabrera. 23. Venancio Rodríguez Ayala. 24. Jesús Acuña Guevara. 25. Irma Pérez Picón. 26. Bartolomé Rodríguez Barreras, relacionados en el considerando segundo de esta sentencia; superficie que deberá ser localizada de acuerdo al plano proyecto que para tal efecto se elabore.

En cuanto a la determinación del destino de las tierras la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente.

TERCERO. En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 248 de la Ley Federal de Reforma Agraria, hágase del conocimiento de las diversas dependencias oficiales que se señalan en el considerando sexto, del contenido de esta sentencia para los efectos legales procedentes.

CUARTO. Publíquese la presente sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tamaulipas y los puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes conforme a las normas aplicables y en los términos de esta sentencia.

QUINTO. Notifíquese a los interesados y comuníquese al Gobernador del Estado de Tamaulipas; ejecútase, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados Numerarios Licenciado Luis Ángel López Escutia, Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, Doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza y la Magistrada Supernumeraria Licenciada Carmen Laura López Almaraz, quien suple la ausencia permanente de Magistrado Numerario, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.- El Magistrado Presidente, **Luis Ángel López Escutia**.- Rúbrica.- Las Magistradas: **Maribel Concepción Méndez de Lara, Odilisa Gutiérrez Mendoza, Carmen Laura López Almaraz**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Carlos Alberto Broissin Alvarado**.- Rúbrica.